

Procesos de integración y espacios de concertación en el Caribe

David E. Lewis

David E. Lewis: sociólogo puertorriqueño; director del Caribbean Policy Project (CPP) de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), Antigua.

Nota: Los planteos expresados en este artículo reflejan la opinión del autor y no necesariamente la de otras instancias.

Palabras clave: descolonización, sociedad civil, ONGs, Caribe inglés.

Resumen:

La historia del modelo político del Caribe angloparlante indica una trayectoria donde la sociedad civil se consolida mediante un proceso de organización política que se inicia con el nacionalismo de los años 40 y la independencia de los 60. El Estado terminó siendo, junto con la sociedad civil, otro garante del propio proceso democrático. La incapacidad de las organizaciones tradicionales como partidos, sindicatos e iglesias para responder a las necesidades inmediatas de la sociedad civil caribeña ha generado el desarrollo de nuevas formas de organización, gestión y participación política a nivel local, ajenas y al margen muchas veces del sistema político formal. El resultado ha sido el surgimiento de experiencias alternativas de poder y participación local que han operado, en ocasiones, en forma complementaria al sistema tradicional de poder político y, en otras, en franca divergencia y oposición. Estos grupos sociales marginados buscan promover una nueva autonomía de la sociedad civil y se perfilan como actores esenciales en el proceso de integración regional

La democracia política del Caribe anglo parlante («Commonwealth Caribbean») presenta una historia de estabilidad social y duración llamativa en relación con otras regiones del mundo en desarrollo. La permanente influencia del parlamentarismo británico y su pluralismo político se ha plasmado en el desarrollo de un sistema de ideas y estructuras institucionales que han favorecido un modelo de democracia electoral y han contrarrestado posibles tendencias autoritarias¹. Esta

¹ Wendell Bell e Ivaar Oxaal: *The Democratic Revolution in the West Indies*, Schenkman Publishers, Cambridge, 1967. Los casos de Forbes Burnham en Guyana y Eric Gairy en Grenada han sido las excepciones históricas.

herencia imperial ha forjado una base estructural ideológica donde predominan los valores políticos de un pluralismo volcado hacia un «Estado de derecho» que es hegemónico sobre la sociedad civil, y en la cual las reglas del juego democrático se respetan y aceptan entre todos los actores políticos –y a su vez se hacen valer. Tal experiencia regional es única en toda América Latina y el Caribe y no tiene contraparte en el resto del mundo en desarrollo².

El modelo político democrático

La tendencia política en las Antillas del «Commonwealth Caribbean» ha reflejado una clara hegemonía de procesos políticos democráticos estables y legítimos fomentados por relaciones de clase favorables a las elites profesionales y clases medias y a un proceso de descolonización constitucional³. Esto ha contribuido sustancialmente al desarrollo de una sociedad civil con relativa fuerza frente al aparato estatal y capaz de crear entre la sociedad altos niveles de confianza y legitimidad hacia el sistema político establecido. Sindicatos, asociaciones profesionales, iglesias y partidos políticos se organizaron como fuerzas sociales independientes del Estado y han servido de contrapeso a su poder. Finalmente, la débil o limitada existencia de aparatos militares nacionales significó que el Estado carecía de poder represivo para usar efectivamente contra una sociedad civil fuerte y coherente.

La dinámica democratizadora de la descolonización británica en el Caribe angloparlante reafirma el proceso reformista de autonomía política, de alrededor de 30 años, y que pasó por varios modelos de relación política entre Gran Bretaña y sus colonias⁴. El hecho de que los británicos hubiesen desarrollado un modelo político para sus «colonias de habitación» (Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica) les permitió aplicar el mismo modelo a la descolonización en sus «colonias de explotación» caribeñas. Esto implicó desde comienzos del colonialismo británico una anuencia a la eventual separación política de sus colonias, lo que nunca

² Hasta recientemente la mayoría de las publicaciones sobre este tema a nivel de América Latina y el Caribe carecían de referencias sobre este caso. La excepción reciente es el excelente compendio de Jorge I. Domínguez, Robert A. Pastor y R. DeLisle Worrell: *Democracy in the Caribbean: Political, Economic, and Social Perspectives*, Johns Hopkins; University Press, Baltimore, 1993.

³ La contribución política de una clase dirigente nacional producto del sistema político parlamentario británico es de suma importancia para este proceso. El trabajo de Grantley Adams en Barbados, Alexander Bustamante y Norman Manley en Jamaica, y Eric Williams; en Trinidad-Tobago, a nivel de sindicatos y partidos políticos, forjó una cultura política democrática que se ha mantenido hegemónica desde el periodo colonial de los años 40 hasta el presente.

⁴ Gordon K. Lewis: *The Growth of the Modern West Indies*, Monthly Review Press, Nueva York, 1968.

existió en los casos franceses o españoles, por ejemplo⁵. En los casos franceses y españoles el conflicto militar se impuso y resultó ser un factor clave para el desarrollo de repúblicas autoritarias y militarizadas, posibilitando así la hegemonía de las fuerzas armadas y del aparato estatal sobre la sociedad civil durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX.

En los países centrales del Caribe angloparlante, Jamaica, Barbados y Trinidad-Tobago, ya desde 1944 comenzaron a darse procesos electorales para una representación directa en el esquema político colonial por medio del sufragio universal⁶. Ya en 1957 Jamaica tenía autonomía política con representación nacional en el gabinete colonial, y obtuvo su independencia en 1962. En Trinidad-Tobago la autonomía se alcanzó en 1961 y la independencia en 1962, bajo el People's National Movement (PNM) de Eric Williams. Barbados logra su independencia en 1966. En los tres casos la vinculación del movimiento sindical con el partido nacionalista en el gobierno representó la posibilidad de una sociedad civil con un proyecto independentista coherente ante el Estado colonial británico. Esa cohesión se mantiene una vez que Gran Bretaña otorga la independencia, y es ahí donde radica la fortaleza de la relación sociedad civil-Estado en estas democracias parlamentarias. El tono político-ideológico moderado de estos movimientos también fue clave para garantizar reformas coloniales por parte del imperio⁷, así como el beneficio de tener un modelo político parlamentario que emular⁸.

Esta estabilidad política y respeto a las reglas del juego se han mantenido en la región durante las últimas dos décadas. Sólo el caso de Jamaica de 1972-1988 muestra la existencia de serias y fuertes tensiones en las relaciones democráticas de la sociedad. Los ocho años de gobierno «socialista democrático» de Michael Manley y el PNP (1972-1980), con su política económica redistributiva y su política internacional de no alineamiento, crearon grandes tensiones entre los diversos sectores sociales, así como en las relaciones con EEUU⁹. Problemas surgidos a raíz de la grave crisis económica que forzó a acuerdos de ajuste

⁵ Tony Smith: «A Comparative Study of British and French Decolonization» en *Comparative Studies in Society and History* N° 20, 1978.

⁶ El sufragio universal se instituyó en Jamaica en 1944, en Trinidad-Tobago en 1946, y en Barbados en 1951.

⁷ No es coincidencia que Gran Bretaña literalmente «exigió» la desvinculación de los movimientos nacionales con cualquier lineamiento ideológico de izquierda como prerrequisito a la legitimidad política. La purga del sector marxista del PNP de Jamaica en 1952, así como la reacción británica ante el marxismo del PPP de Cheddi Jagan en Guyana reflejan esta posición ideológica.

⁸ Anthony Payne: «Westminster Adapted: The Political Order of the Commonwealth Caribbean» en Domínguez et. al.: ob. cit.

⁹ John Stephens y Evelyne Huber Stephens: *Democratic Socialism in Jamaica: Political Movements and Social Transformation in Dependent Capitalism*. Princeton University Press, 1986.

estructural con el FMI presionaron aún más la situación política, resultando en unas elecciones nacionales en noviembre de 1980 con cerca de 500 víctimas de la violencia partidista. Pese a la gran violencia política y a la presión de EEUU para subvertir el orden constitucional, las elecciones se llevaron a cabo y se produjo un traspaso pacífico del poder.

El nuevo régimen de Edward Seaga y el Jamaica Labor Party (JLP) triunfó en dos elecciones y se mantuvo entre 1980 y 1988. También enfrentó algunas crisis al reiterarse la violencia política, pero con menor intensidad, en la campaña electoral de 1988, cuando Manley y el PNP recobraron el gobierno con una victoria electoral impresionante por su fortaleza democrática, efectuándose de nuevo el traspaso del poder político y manteniendo el orden constitucional. El breve periodo en el que el sistema democrático se vio debilitado fue acotado por las bases institucionales e ideológicas del propio sistema.

En ambas ocasiones, únicas en la región con excepción de las experiencias de Guyana y Granada, la fortaleza democrática se manifestó en términos de un poder balanceado entre la sociedad civil y el Estado. En tiempos de crisis y de problemas políticos este equilibrio siempre ha favorecido a la sociedad civil y al proceso democrático institucional, respetándose los valores esenciales de la cultura política parlamentaria. La ausencia de una tradición militarista, pese a la presión ejercida por EEUU después de la invasión de Granada en 1983, también ha sido un factor clave en este proceso¹⁰.

Los casos de Guyana y Granada constituyen excepciones interesantes, puesto que rompen el esquema democrático regional, a su vez por razones muy particulares y en algunas instancias coyunturales. En relación con Granada debe destacarse que tanto el fenómeno del autoritarismo de Gairy desde los años 50 como el del New Jewel Movement (NJM) de 1979-1983, son reflejos no tanto de la tendencia autoritaria o la ausencia de un polo democrático, sino tal vez del síndrome de pequeños micro-Estados que afecta a todo el Caribe oriental¹¹. La falta de una trayectoria política, resultado de su papel marginado dentro del colonialismo británico en la región, así como la clara incapacidad para poder desarrollar un proceso político soberano frente a las fuertes tendencias políticas regionales, produjeron en el caso de Granada (tanto durante Gairy y el NJM, como bajo los gobiernos post-invasión del Granada National Party de Blaize y de Braithwaite) una experiencia política ajena a la región de las Antillas Mayores, pero posiblemente no

¹⁰ Carl Stone: *Class, State, and Democracy in Jamaica*, Praeger Books, Nueva York, 1986; Georges Fauriol: «The Jamaica Models: The U.S. and Democracy in the Caribbean» en Scott B. MacDonald et. al. (comps.): *The Caribbean after Grenada: Revolution, Conflict, and Democracy*, Praeger, Nueva York, 1988.

¹¹ Vaughan Lewis (comp.): *Size, Self-determination, and International Relations: The Caribbean*, ISER-UWI, Jamaica, 1976.

disociada al proceso político de las islas del Caribe oriental, donde liderazgos fuertes y semiautoritarios dominan el escenario político por largos periodos, tanto en la era colonial como poscolonial¹².

El caso del autoritarismo en Guyana es único porque no sólo muestra una sociedad con fuertes divisiones etno-raciales entre poblaciones africanas e hindúes que han afectado la estabilidad sociopolítica de la nación (algo que existe también en Trinidad-Tobago), sino también porque refleja el fenómeno de un movimiento nacionalista anticolonial dominado no por grupos sociales profesionales y moderados, sino por elementos más orientados hacia reivindicaciones populares en el proceso de descolonización que hacia el lento proceso tradicional de descolonización mediante reformas constitucionales¹³. Formado en 1950, el ala radical y marxista del PPP dominó el escenario político guyanés, resaltando en el movimiento nacionalista la ausencia de un componente moderado de la clase media profesional. Curiosamente, en Trinidad-Tobago, donde también existe esta división etno-racial, el PNM y Eric Williams lograron consolidar un movimiento nacionalista integrador y moderado (comparativamente), evitando así la tensión y confrontación que se desarrolló en Guyana entre estos sectores¹⁴.

Una victoria electoral cerrada en 1953 le dio el control del gobierno a Jagan y el PPP. Sin embargo, sus planes de reforma agraria, sindicalismo y transformaciones sociales, así como su supuesta identificación comunista y las presiones dirigidas a Londres por parte de las elites y el gobierno colonial, terminaron por provocar un golpe contra el gobierno y la suspensión de la Constitución apenas a los 13 días de gobierno. Es a partir de este suceso, seguido por la continua tensión de las divisiones etno-raciales en la política (Jagan y el PPP con el sector hindú vs. Forbes Burnham y el Peoples National Congress-PNC con el sector africano), que se sientan las bases políticas del autoritarismo contemporáneo en Guyana. A pesar de victorias electorales del PPP en 1957 y 1961 y de varios gobiernos constitucionales, las divisiones etno-raciales sirvieron

¹² Los casos históricos de la familia Bird en Antigua, James Mitchell padre e hijo en San Vicente, Eugenia Charles en Dominica, John Compton en Santa Lucía, y Kennedy Simmonds en St. Kitts. Posiblemente todas han evitado la crisis del autoritarismo que se asentó en Granada porque su experiencia negativa les ha servido de ejemplo disuasivo. V. tb., Patrick Emmanuel: *Governance and Democracy in the Commonwealth Caribbean*, ISER-UWI, Barbados, 1983; Selwyn Ryan: «The Survival of Liberal Democracy in the Commonwealth Caribbean» en *Caribbean Affairs* 5/1, 1-31 1992; Vaughan Lewis: «The Eastern Caribbean States: Fledgling Sovereignties in the Global Environment» en Domínguez et. al., cit.

¹³ Lewis: ob. cit; Percy Hintzen: *The Costs of Regime Survival: Racial Mobilization, Elite Domination and Control of the State in Guyana and Trinidad*, University of California Press, Berkeley, 1990.

¹⁴ Selwyn Ryan: *Trinidad and Tobago: The Independence Experience, 1962-1987*, ISER-UWI, Trinidad, 1987.

para evitar la consolidación de un movimiento nacionalista unido, retrasando así la independencia de este país hasta 1966¹⁵.

Burnham y el PNC ganaron «las últimas elecciones honestas del país»¹⁶ y formaron el gobierno nacional de 1966. Estos comicios iniciaron un patrón de fraude electoral duradero en Guyana y un proceso de fortalecimiento del Estado autoritario ante la sociedad civil¹⁷. Desde entonces hasta 1992 el PNC logró controlar el sistema político, manipulando las divisiones etno-raciales y controlando la estructura electoral y la burocracia política, la policía y las fuerzas armadas¹⁸, y utilizando un discurso de izquierda antimperialista y socialista. El PNC logró el predominio durante casi tres décadas por encima de las divisiones y la desintegración de la sociedad guyanesa.

La historia del modelo político del Caribe angloparlante indica una trayectoria donde la sociedad civil se consolida mediante un proceso de organización política que se inicia con el nacionalismo de los años 40 y la independencia de los 60. Esta consolidación ha hecho posible que los regímenes políticos enfrenten tensiones y contradicciones sin caer en crisis profundas y en cuestionamientos al modelo fundamental, manteniendo la vigencia de un proceso fortalecido por un sistema de reglas para gobernar: un depurado mecanismo electoral, una elevada y constante participación popular en las elecciones generales, el respeto al criterio de la mayoría y la responsabilidad de libre escogencia entre opciones políticas diferentes, conformadas también libremente. El Estado terminó siendo, junto con la sociedad civil, otro garante del propio proceso democrático¹⁹.

Desarrollo, sociedad civil y concertación

Durante los últimos quince años, los sistemas políticos en el Caribe han sufrido el deterioro de sus estructuras tradicionales de poder, especialmente en términos de la creciente debilidad de los partidos y los movimientos sindicales –baluartes históricos de la estructura política tradicional. Esta situación se ha visto complicada por la forma como la crisis económica regional ha erosionado un sinnúmero de gobiernos,

¹⁵ Harold Lutchman: *From Colonialism to Co-operative Socialist Republic: Aspects of the Political Development of Guyana*, Institute of Caribbean Studies, UPR, Río Piedras, 1974; Robert H. Manley: *Guyana Emergent: The Post-Independence Struggle for Non-Dependent Development*, G.K. Hall, Boston, 1979.

¹⁶ Jagan ganó las elecciones de 1992 y es presidente hasta 1997.

¹⁷ Clive Y. Thomas: *The Rise of the Authoritarian State in the Periphery*, Monthly Review Press, Nueva York, 1984.

¹⁸ George K. Danns: *Domination and Power in Guyana: A Study of the Police in a Third World Context*, Transaction Publishers, Nueva Jersey, 1982; Kempe Ronald Hope: *Guyana: Politics and Development in an Emergent Socialist State*, Mosaic Press, Nueva York, 1985.

¹⁹ Omar Davies (comp.): *The State in Caribbean Society*.

creando vacíos de legitimidad política en el nivel nacional y regional. La incapacidad de organizaciones tradicionales como partidos políticos, sindicatos e iglesias para responder a las necesidades actuales e inmediatas de la sociedad civil caribeña ha generado el desarrollo de nuevas formas de organización, gestión y participación política a nivel local, ajenas y al margen muchas veces del sistema político formal.

El resultado ha sido el surgimiento de experiencias alternativas de poder y participación local que han operado, en ocasiones, en forma complementaria al sistema tradicional de poder político y, en otras, en franca divergencia y oposición. Estos grupos sociales marginados buscan promover una nueva autonomía de la sociedad civil, frente al aparato estatal y al sistema político y económico tradicional²⁰. De manera que lo informal, a nivel económico, termina vinculándose estrecha y orgánicamente con lo informal en la esfera política, y la incidencia de las políticas económicas de ajuste estructural se asocia al tema de la participación política en el esquema de desarrollo vigente.

El corolario de todo esto ha sido el crecimiento geométrico durante la pasada década de nuevas formas de organización en la sociedad civil, atendiendo a necesidades económicas básicas y a demandas políticas esenciales –grupos de base, organizaciones comunitarias y barriales, grupos de mujeres, cooperativas, organizaciones locales de desarrollo (OLD) y organizaciones no gubernamentales (ONGs) en general– y que han logrado constituirse en movimientos sociales autónomos, sirviendo como puentes entre los sectores populares marginados y las instituciones formales establecidas, a nivel económico y político. Además, estas nuevas organizaciones han proporcionado a tales sectores una visión e instrumentos de gestión alternativos para viabilizar sus demandas sociales, políticas, económicas, de género, generacionales, etc.

Los partidos y sindicatos han tenido dificultades para crear nexos con el sector informal y las comunidades urbanas y rurales donde se aglutinan los nuevos sujetos sociales caribeños. El apogeo de las organizaciones comunitarias de base, así como de las OLD y ONGs responde a los requerimientos de estos grupos de participar no sólo económicamente, sino también políticamente, en el debate sobre el futuro desarrollo económico de la región. A través de la educación popular, la movilización política, difusión en cooperativas, sindicatos, grupos de base y trabajo eclesial, estas organizaciones han comenzado a fomentar acciones reivindicativas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Tanto en el campo como en la ciudad se delinean

²⁰ V. el estudio regional comparativo de CRIES, CERLAC-Universidad de York-Toronto, y la UWI-Jamaica: «Organizaciones de poder comunitario y democracia popular en Centroamérica y el Caribe», 1988-1990; Maxine Henry-Wilson: «Community Empowerment: Alternative Structures for National Development» en Judith Wedderburn (comp.): *Integration and Participatory Development*, ACE-FES, Jamaica, 1990.

estrategias a corto plazo para atender necesidades básicas inmediatas y se discuten estrategias a largo plazo relacionadas con el cambio social a nivel comunitario, nacional y regional²¹.

Al desarrollar e impulsar proyectos de generación de ingresos, cooperativas de producción y mercadeo, campañas educativas de salud, nutrición y medio ambiente, y el diseño de programas de educación popular, las ONGs han logrado articular la ampliación de la conciencia comunitaria de base con la cuestión del poder en la sociedad, apoyando directamente, de esta manera, a las organizaciones populares que procuran potenciar al sector informal y promoviendo perspectivas de cambio en la política y economía de la sociedad caribeña. Una vez asegurada su permanencia económica, el sector informal logra convertirse en un actor importante, dado su carácter y demandas sociopolíticas, frente al orden formal establecido²².

El auge y el éxito relativo de la gestión no gubernamental tiene que ver tanto con su habilidad para responder a las necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones marginadas, como con su posibilidad de manejar recursos humanos y financieros con los cuales funcionan diferentes integrantes del sector informal. A su vez, esta gestión repercute no sólo en las condiciones económicas de la población, sino también tiene consecuencias directas para su participación política y su concientización social²³. Sumado a este esfuerzo económico, las ONGs se han vinculado al crecimiento de nuevos movimientos sociales caribeños organizados alrededor de cuestiones de género, ambientales, antimilitaristas, así como de derechos civiles y humanos. En este sentido, se han construido alianzas multisectoriales donde se agrupan, complementariamente, diversos intereses y sectores a lo largo del Caribe insular, desde Haití y República Dominicana hasta Trinidad-Tobago y Guyana.

En República Dominicana, durante 1988 surgió el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), una coalición entre las comunidades cristianas de base, los grupos sindicales, trabajadores y mujeres desplazadas en los barrios del norte de Santo Domingo. Además de alentar la defensa de la calidad de vida en las poblaciones marginales, COPADEBA auspició proyectos de adiestramiento, mercadeo de productos agrícolas, y educación popular urbana y rural, en conjunto con

²¹ David E. Lewis: «The Contemporary Caribbean: Economic Crisis, Social Movements, and Alternative Development Strategies» documento preparado para OXFAM América, Boston, 8/1988, mimeo; tb.: «NGO's and Alternative Development Strategies» en Wedderburn: ob. Cit.

²² Peta-Anne Baker: «The Search for Transformation Strategies - A Perspective from the Non-Governmental Sector» en Stanley Lalta & Marie Freckleton (comp.): *Caribbean Economic Development: The First Generation*, Ian Randle Publishers, Jamaica, 1993.

²³ Ann Gordon Deabek (comp.): «Development Alternatives: The Challenge for NGO's», *World Development* vol. 15, 1987.

otras ONGs tales como el Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE), el Instituto Ecuménico para el Desarrollo de los Pueblos (INEDEP), y el Centro Cultural Poveda. Una manifestación similar se ha dado en el área de desarrollo ambiental con un sinnúmero de ONGs trabajando en el pro de la defensa del medio ambiente²⁴.

La educación popular ha sido un aspecto relevante del trabajo efectuado por las distintas ONGs en el Caribe angloparlante. En Belice, la Society for the Promotion of Education & Research (SPEAR) concentra sus esfuerzos en el área de formación a través de la educación popular, la investigación participativa, el desarrollo comunitario y la acción social. Asimismo auspicia, en colaboración con ONGs internacionales y regionales, actividades de producción y programas de apoyo para el fortalecimiento de sindicatos, cooperativas y grupos de jóvenes y mujeres.

En Jamaica, la Association of Development Agencies (ADA) coordina una red nacional de agencias de desarrollo con enlaces regionales e internacionales que apoya iniciativas locales de cambio social en torno a la participación popular y la gestión local en relación con temas económicos nacionales como el desempleo, ajuste estructural y deuda externa, seguridad alimentaria, empleo femenino en zonas francas y otros.

Las organizaciones religiosas han estado a la vanguardia de las demandas de los sectores populares y de economía informal en Haití. ONGs como el Centro Ecuménico para los Derechos Humanos, vinculada a la red regional «Caribbean Human Rights Network» del Consejo Caribeño de Iglesias (CCC-Barbados), y el Groupes des Religieuses Immerse en Milieu Populaire (GRIMPO) propician proyectos de desarrollo local con poblaciones marginadas, grupos campesinos, y trabajadores rurales. Por medio de estas actividades de desarrollo se insertan en el debate nacional sobre la democratización, los derechos humanos y la promoción de la participación política.

En el Caribe oriental, donde la producción agrícola aún se centra en el cultivo de bananos y especias para la exportación, por parte de grupos pequeños de campesinos, la labor de las ONGs como el Small Projects Assistance Team (SPAT) de Dominica y el Projects Promotion de San Vicente, atiende las necesidades básicas de estas comunidades campesinas y, a su vez, enfatiza un concepto de desarrollo más balanceado y sostenible donde el trabajo y la gestión agrícola no queden relegados a ser meros objetos de producción. Igualmente, otra organización en San Vicente, el Caribbean People's Development Agency

²⁴ V. Barbara Deutsch Lynch: «Filling the Vacuum: The State, the People and Environmental NGO's in the Dominican Republic», ponencia presentada a la Asociación de Estudios del Caribe en Mérida, México, 5/1994.

(CARIPEDA), utiliza su red regional para operar como puente de interlocución entre las ONGs caribeñas y las internacionales comprometidas con un proceso de desarrollo alternativo, perfilándose como un eje central del debate económico regional sobre las zonas francas y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), las políticas de ajuste estructural, la deuda externa y la militarización regional.

Si bien la gestión de las ONGs no refleja la variada actividad del sector informal regional, sí resalta la diversidad del fenómeno en el ámbito de la sociedad civil. Fungiendo como voceras de las posiciones y necesidades del sector popular, las ONGs han logrado instituirse como sólidas acompañantes del movimiento social caribeño, apoyando con recursos humanos y financieros, creando espacios políticos de acción, discusión y gestión, y fomentando la formulación de orientaciones estratégicas a corto y largo plazo con respecto a la participación política, la gestión y política económica, y las relaciones con el aparato estatal y el sector económico formal. Su avance se refleja en el hecho de que cualquier discusión sobre las políticas económicas a nivel nacional y/o regional debe considerar el punto de vista del ámbito no gubernamental y de los sectores populares²⁵. Más aún, en un ambiente regional tan fragmentado y deteriorado, el aporte no gubernamental ha servido para aglutinar esfuerzos tendientes a lograr un consenso de ideas y una coordinación de acciones en cuanto a alternativas económicas, sociales y políticas para la región²⁶. Su compromiso y responsabilidad con ese esfuerzo ha contribuido a la integración del trabajo no gubernamental en el mundo de lo informal. Tanto las iniciativas del Caribbean Policy Development Center (CPDC) en Barbados y el Caribbean Network for Integrated Rural Development (CNIRD) en Trinidad como organizaciones «sombrillas» han sido importantes catalizadores de activismo por parte de las ONGs en las discusiones de políticas económicas e iniciativas de integración regional. Igual de importante ha sido también, con un enfoque más técnico y analítico, el papel de la Asociación de Economistas del Caribe (ACE), buscando darle una voz analítica a la visión alternativa de desarrollo económico regional.

La manifestación más comprometida de este enfoque ha sido, sin embargo, la de las ONGs feministas que han logrado articular las demandas y necesidades de género con una perspectiva de desarrollo alternativo integral y orgánica, que aglutina la economía regional, nacional, comunitaria y del hogar y utiliza los recursos de la educación popular, el teatro, la investigación aplicada, el análisis y la movilización y

²⁵ V. los documentos regionales de las ONGs como insumos de procesos de diálogo, consenso y concertación: *West Indian Commission: Time for Action*, Barbados, 1992; y CPDC-Caribbean Policy Development Center: *Challenges in Development: Interventions of NGO's at the CARICOM Regional Economic Conference of February 1991*, Barbados, 1992.

²⁶ David E. Lewis: ob. cit.

acción política directa. ONGs como Mujer y Desarrollo (MUDE) y CIPAF en República Dominicana, SISTREN en Jamaica, Women and Development (WAND) en Barbados, Red Thread Collective, y la red de la Caribbean Association for Feminist Research & Action (CAFRA) en Trinidad, son agrupaciones que han analizado factores como la raza, la clase social y el género integrándolos con los problemas económicos y del medio ambiente, y produciendo como resultado «visiones alternativas de desarrollo regional»²⁷. Por otra parte, intentan servir de nexo entre lo personal y lo político, lo privado y lo público, la economía local de la comunidad y el hogar con la economía nacional y la integración regional. En este sentido han demostrado tener capacidad analítica y de movilización política con una fuerte incidencia en el debate económico regional.

De manera similar, y como elemento clave de la sociedad civil, el papel del sector privado y la clase empresarial regional es fundamental en cualquier análisis del futuro de los espacios de concentración para la integración en el Caribe. Tradicionalmente visto como un elemento aparte, el sector privado regional juega un papel importantísimo no sólo en torno a las relaciones entre capital y trabajo (sindicatos y organizaciones laborales), sino también en cuanto a su papel de apoyo y/o oposición a las políticas económicas de los gobiernos y a las políticas de integración regional. Más y más, como hemos visto en el informe del West Indian Commission y en las iniciativas de la Asociación de Estados del Caribe, la ausencia de una efectiva participación del sector empresarial nacional y regional en estas iniciativas puede resultar en la carencia de validez económica real. Por esta razón se hace tan necesario un consenso y una concentración regional que incorpore al sector privado, así como al resto de la sociedad civil, no como apéndices o notas al calce observando las decisiones, sino como partícipes mismos con corresponsabilidad en las iniciativas y su implantación efectiva.

Prospectivamente, las estrategias de cooperación e integración regional que no incorporen la diversidad de actores reales de la sociedad civil no tienen serias posibilidades de éxito. La relación entre integración regional, concentración política, gobernabilidad y estabilidad social es cada día más estrecha a través precisamente de la sociedad civil. En este sentido existe un espacio para dialogar y concertar los aspectos sociopolíticos de los procesos de integración regional, con énfasis particular en sus manifestaciones y sus idiosincrasias nacionales. Siendo estas organizaciones e instituciones las que verdaderamente han tenido éxito en el área de la integración, es de suma importancia para cualquier

²⁷ Carmen Diana Deere et. al. (comps.): *In the Shadows of the Sun: Caribbean Development and U.S. Policy*, Westview Press, Boulder, Colorado: 1990; Kathy McAfee: *Storm Signals: Structural Adjustment and Development Alternatives in the Caribbean*, Zed Press, Londres, 1991; Clive Y. Thomas: «Alternative Development Model for the Caribbean» en Lalta y Freckleton: ob. cit.

agenda gubernamental poder tenerlas como copartícipes de las iniciativas regionales futuras. De esta manera se volverá necesario e imperativo para el futuro de un proceso político y económico concertado el tener un marco específico y único para estos actores no tradicionales de la sociedad civil²⁸.

Autonomía y desarrollo sostenible

El resultado y balance de estas iniciativas de las ONGs y el resto de la sociedad civil muestra una serie de alternativas de transformación económica en el nivel micro de la sociedad. Se destacan los niveles de sostenibilidad y autosuficiencia de las poblaciones marginadas, pero que a su vez también están vinculadas a iniciativas de participación a nivel comunitario así como nacional y regional, enfocando el debate en torno a las estrategias de desarrollo para el Caribe. Con este tipo de visión alternativa se hace posible evaluar los procesos de desarrollo mediante un concepto mucho más abarcador como es el de los *recursos sociales*: democracia, comunidad, tecnología, educación, justicia, equidad social, etc., permitiendo así una visión integradora y sostenible del proceso de desarrollo, conjugando lo netamente economicista con los valores sociales y comunitarios aquí discutidos.

De esta manera, la lógica de la participación política se vincula al protagonismo de la sociedad civil –en lo social, político y económico–, ante la sociedad política formal del Estado, el gobierno, la burocracia, los partidos, etc. A su vez esta lógica busca establecer puentes (físicos y conceptuales) entre la gestión comunitaria, la gestión nacional y la gestión regional, resultando en una visión y una organización íntegra y colectiva del proceso de desarrollo. A nivel gremial, comunitario, nacional y regional hemos visto cómo esta realidad de la sociedad civil se está dando al margen y en contraposición de las iniciativas formales de las instituciones oficiales nacionales y regionales. El reto hacia ambos lados es el poder desarrollar iniciativas de consenso y concentración que resulten en acciones coherentes enfocadas hacia el mejoramiento de la vida.

Para que el desarrollo regional sea sostenible tiene que haber tanto un énfasis sobre la productividad y eficiencia económica como sobre las necesidades de desarrollo humano, cohesión y concentración social, y políticas ambientales sostenibles. Un desarrollo de este tipo en el Caribe sólo puede lograrse mediante la creación y preservación de nuestros recursos humanos y con un alto índice de cohesión social. Las políticas coherentes son más viables en un ambiente político donde prime el

²⁸ Las iniciativas recientes en cuanto a la Cumbre de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en Copenhague (marzo 1995) son ilustrativas de esta nueva realidad; v. «The World Summit for Social Development: A Caribbean Perspective» documento ECLAC-Caribe, Trinidad, 11/ 1994.

consenso social de base amplia, en virtud del cual los grupos de intereses polarizados no hallen mucho descontento al que sacarle partido. De esta manera se hace posible la concentración social en pro de políticas de desarrollo. Más aún, sin una política de base amplia se torna imposible la integración pluralista de elementos de la sociedad civil al diálogo y a la implantación de políticas de desarrollo²⁹.

Este tipo de análisis apunta hacia la necesidad de comenzar a establecer una agenda de acción en torno a políticas de desarrollo que incorpore una visión de consenso entre crecimiento y equidad, necesidades básicas y recursos escasos, marginalidad social y servicios sociales, explotación de recursos naturales y equilibrio ambiental, así como entre los sectores de la sociedad civil que hemos discutido y la sociedad política formal (Estado, gobierno, partidos políticos). El impacto de este tipo de iniciativas sobre las posibilidades de avance de los procesos de integración sociopolítica en la región se dejan entrever en los siguientes puntos: a) participación en la formulación de políticas sociales y en las relaciones con la sociedad política, el Estado y el gobierno; b) participación en la formulación e implantación de políticas económicas nacionales y regionales, sobre todo en aquellas de carácter integracionista (ej., Asociación de Estados del Caribe, CARICOM, vinculación al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, entre otros); y, c) relación entre actores reales y sujetos sociales *vis-à-vis* actores oficiales en torno a la formulación e implantación de políticas sociales y económicas a nivel nacional y regional.

En el caso de la sociedad civil como tal, la agenda no sólo debe enfocar áreas de acción e ingerencia, sino que también debe aspirar a ampliar nuestro conocimiento y análisis, hoy limitados, del universo de actividades, iniciativas, actores y participaciones de la sociedad civil ante los procesos políticos y económicos de la región. En este sentido, la tarea investigativa no puede ser más clara puesto que en la mayoría de los casos nacionales, y también a nivel regional, carecemos por completo de un entendimiento empírico del ámbito de acción de la sociedad civil frente a la sociedad política en torno al debate integracionista así como en relación con su participación en el mundo político y económico oficial. Este tipo de inventario analítico es clave para cualquier intento de pronosticar y prever las posibilidades de implantar (a nivel nacional y regional) una relación de consenso y concentración entre ambos sectores.

²⁹ Camille Lampart: «The Struggle for Sustainable Development» en Lalta y Freckleton: ob. cit.